



LA PANDEMIA DE LA COVID-19 Y SUS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

PANDEMIA, VULNERABILIDAD Y EMPLEO EN ESPAÑA: NUEVAS ASIMETRÍAS SOCIALES Y TERRITORIALES.

Poco más de una década después de haber padecido los efectos de la Gran Recesión, la sociedad española se enfrenta a una nueva crisis de carácter sistémico, con origen muy diferente, pero consecuencias que también incrementan el malestar general y cuestionan un modelo de crecimiento que de nuevo muestra sus debilidades estructurales, particularmente visibles en ciertos territorios.

A partir de una crisis sanitaria que puso en cuestión la preparación del sistema público de salud, se desencadenó una crisis económica en cascada, que comenzó en los sectores más afectados por el freno a la movilidad como el turismo, el transporte aéreo y aquellas industrias más dependientes de cadenas de valor globales, para difundirse luego a la práctica totalidad de actividades. A través, sobre todo, de su impacto directo sobre el empleo, esta inesperada situación ha provocado una crisis social, que aumenta las cifras de población en riesgo de pobreza y, con ello, las desigualdades preexistentes, tanto entre grupos sociolaborales como entre regiones y ciudades.

El análisis de la negativa evolución del mercado de trabajo, comparando la situación a 30 de junio de 2020 con la existente un año antes para evitar el sesgo provocado por la estacionalidad de bastantes empleos, así como su territorialización, permiten comprobar la diferente gravedad del impacto padecido según actividades y segmentos de población. Pero la combinación de diversos indicadores laborales posibilita calcular también un índice sintético de vulnerabilidad provincial frente a la pandemia. Se incorpora así una dimensión geográfica al diagnóstico sobre la actual crisis socioeconómica, poco abordada hasta el momento, que no sólo añade un nuevo componente descriptivo, sino que permite también una reflexión sobre la incidencia respectiva de la enfermedad y del modelo productivo preexistente en cada lugar para interpretar las nuevas desigualdades.

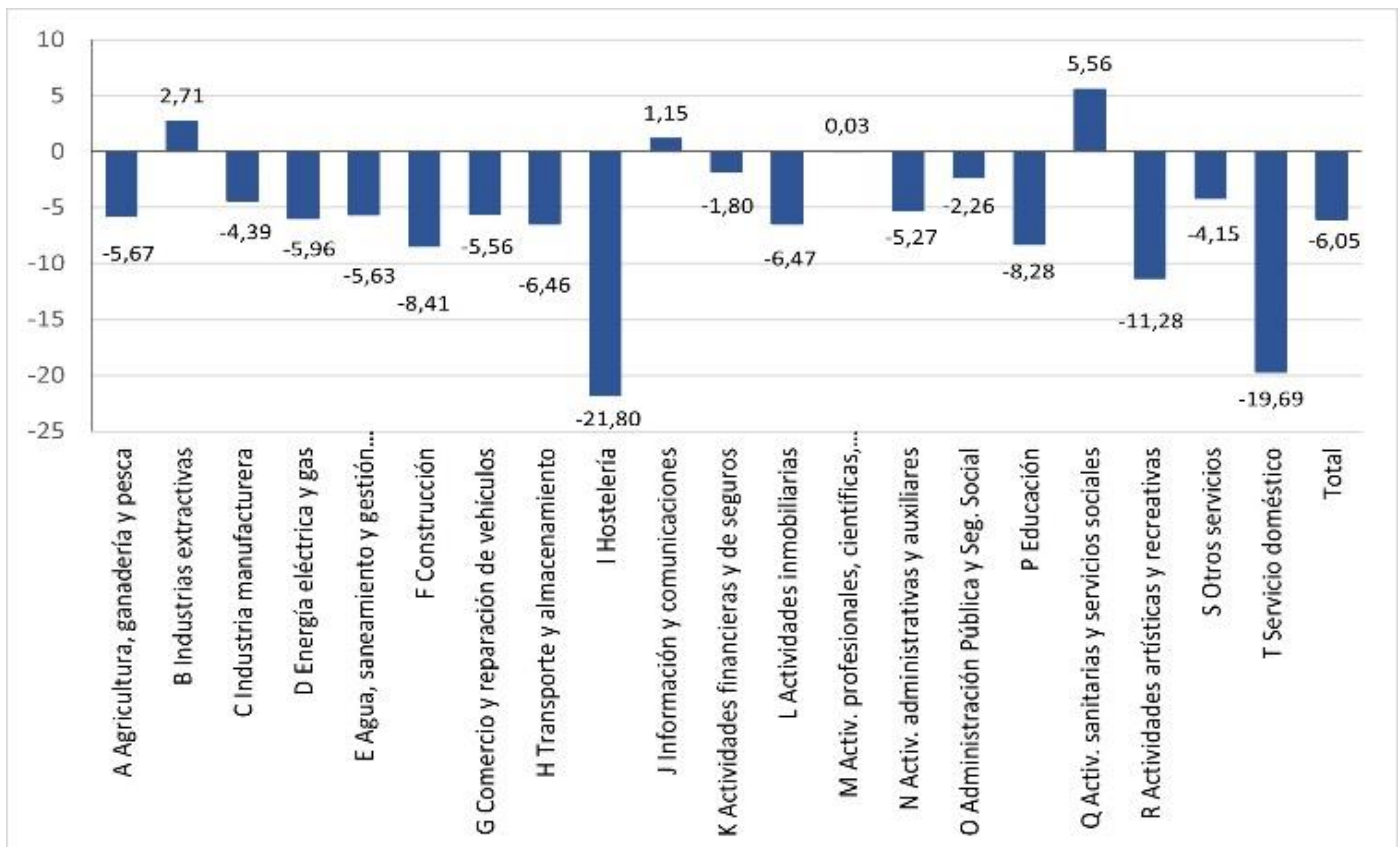
Resulta indudable que la pandemia está generando un impacto muy negativo sobre las condiciones de vida de buena parte de la ciudadanía y una de sus manifestaciones más tangibles es la evolución del mercado laboral. El cierre de los centros de trabajo provocado por el confinamiento de la población y las limitaciones para su reapertura, ante la persistencia de riesgos para la salud o la quiebra de las empresas, ha supuesto una pérdida de empleos en el mundo estimada en 480 millones -equivalentes a tiempo completo- según el informe publicado en junio por la OIT. Pese a la repetida idea de que el virus no distingue entre clases sociales o grupos profesionales, las consecuencias de la COVID-19 sí son muy diferentes y abren nuevas brechas, tanto si se considera la evolución de la cantidad como de la calidad del empleo, a cualquier escala que se analice.

Tal como ya ocurrió en la *Gran Recesión*, España vuelve a situarse entre los países más afectados, no sólo por la pandemia, sino también por su derivada en ese empeoramiento de las condiciones laborales. Las debilidades de la estructura económica, junto a las características del marco institucional que regula su mercado laboral, propician que las crisis se salden con un inmediato y profundo deterioro del mercado de trabajo.

La destrucción de empleos muestra un primer contraste según actividades, afectando sobre todo a las más vinculadas con la movilidad y a numerosos servicios dependientes del nivel de consumo de la población, que son intensivas en trabajo. Pese a la recuperación iniciada en mayo, los

ocupados según la *Encuesta de Población Activa* al finalizar junio eran 1,23 millones menos que un año antes (-6,1%) y, entre los grandes grupos de actividades, el retroceso fue máximo en hostelería (-21,8%), personal de servicio doméstico (-19,7%) y actividades artísticas, culturales y de entretenimiento (-11,3%), superando también el promedio en los casos de la construcción, educación, actividades inmobiliarias, o transporte y almacenamiento.

Si se desciende al centenar de ramas de actividad identificables a dos dígitos de la CNAE, excluyendo aquellas con menos de diez mil ocupados, la reducción fue máxima en las cinematográficas y audiovisuales (-49,0%), servicios de alojamiento (-24,3%), actividades relacionadas con el empleo (-21,6%), servicios de comidas y bebidas (-21,0%), tareas del hogar (-19,7%), administrativas (-19,4%), de creación, artísticas y de espectáculos (-18,4%), o transporte aéreo (-16,1%). Como contrapunto, el sector sanitario y de servicios sociales (+5,6%), junto a las actividades ligadas a la información y comunicaciones (+1,1%) aumentaron ligeramente su ocupación, mientras las actividades profesionales, científicas y técnicas, o la administración pública, se mantuvieron estables. A eso se añade una distribución bastante similar de los trabajadores acogidos a un ERTE, que llegaron a 3,38 millones a comienzos de mayo y que al finalizar junio aún eran 1,83 millones, con una presencia destacada en los servicios de comidas y bebidas (20,1% del total), comercios (16,2%), servicios de alojamiento (10,8%) o educación (4,5%).



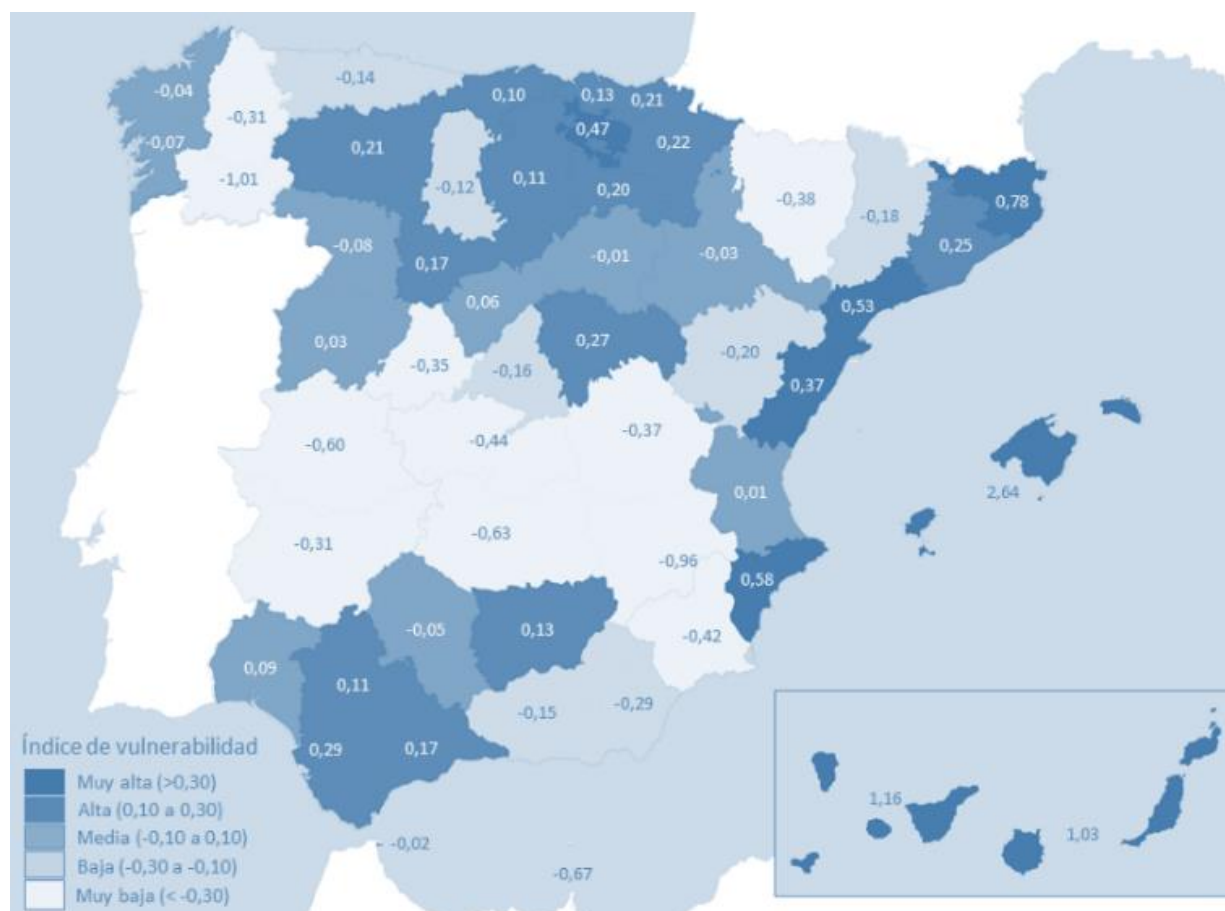
Pero si el virus ataca con mayor intensidad a quienes muestran una situación inmunitaria más deteriorada, los impactos sociolaborales de la pandemia también se agravan entre los más débiles, representados por los *grupos de riesgo*, que suelen incluir a las mujeres, los jóvenes -en especial los de escasa formación- y los inmigrantes.

Según la EPA, el desempleo aumentó un 4,2% entre junio de 2019 y 2020 hasta alcanzar los 3,37 millones, siendo mayor entre los hombres (8,7%) que entre las mujeres (0,3%), pues para ellas la pandemia se tradujo, en mayor medida, en el abandono del mercado laboral, un resultado no ajeno a su mayor participación en las tareas de cuidados no remunerados en el hogar, que en bastantes ocasiones debieron incrementar tras el cierre de los centros educativos y el confinamiento domiciliario. El aumento del paro registrado también resultó muy acusado para los jóvenes con menos de 25 años (53%), que la OIT califica como *generación del confinamiento*, pues a la dificultad para mantener sus estudios se suma una mayor precariedad laboral, que facilitó la más rápida destrucción de muchos puestos de trabajo, junto al aumento de las dificultades de inserción laboral para quienes buscan su primer empleo en un contexto recesivo. Por su parte, la población inmigrante aumentó un 23,0% su tasa de paro frente al 5,9% de la población española, al estar más expuesta por la abundancia de contratos temporales, así como por su destacada presencia en sectores como la hostelería y la restauración, el pequeño comercio o el servicio doméstico.

Por último, los sucesivos *shocks* de oferta y demanda padecidos han tenido también su reflejo en los contratos firmados, que en junio de 2020 fueron un 42,3% inferiores a los de un año antes, llegando al 47,5% en el caso de las mujeres. Lo que no ha cambiado de forma apreciable es la precariedad, afianzada desde hace décadas, pues nueve de cada diez contratos eran temporales antes del estallido de la pandemia y lo siguen siendo después.

En un país tan golpeado por la COVID-19 como España, todos sus mercados regionales y locales de trabajo padecen sus efectos. Pero si la vulnerabilidad frente a la enfermedad ha resultado bastante desigual, lo mismo puede decirse respecto a sus impactos sociolaborales, que no son un simple calco de los anteriores, sino que muestran identidad propia y, en consecuencia, un mapa muy distinto en función de su específica vulnerabilidad.

Se identifica como vulnerable aquel territorio con alta probabilidad de verse afectado de forma negativa por algún evento o amenaza de origen externo, desde una catástrofe natural a una crisis económica, un conflicto bélico o, ahora, una epidemia. Pero esa vulnerabilidad resulta mayor en unos casos que en otros, lo que puede explicarse acudiendo a dos tipos de factores complementarios. En primer lugar, una mayor exposición al riesgo, que en este caso puede vincularse con una excesiva especialización en actividades muy afectadas por restricciones a la movilidad, o con una dependencia externa también elevada, visible en una demanda de sus productos o servicios demasiado concentrada. En segundo lugar, una elevada fragilidad o sensibilidad, que puede relacionarse con su estructura



laboral (abundancia de empleos precarios, escasa cualificación, perfil ocupacional con mucho trabajo manual poco sustituible por teletrabajo...) y empresarial (excesivo peso relativo de PYMEs y microempresas con escasos recursos financieros para resistir, elevado endeudamiento, escasa competitividad...).

Con las limitaciones de información existente por el momento y utilizando como unidad de análisis las cincuenta provincias y dos ciudades autónomas, se ha realizado una primera aproximación al mapa de los impactos laborales de la pandemia en España mediante la combinación de varios indicadores que consideran la evolución entre junio de 2019 y 2020 desde diferentes perspectivas complementarias.

Se analizó así la evolución de las tasas de actividad, la población ocupada, el paro registrado, los contratos firmados y la tasa de temporalidad en esa contratación, junto a la proporción de trabajadores en ERTE sobre el total de afiliados en su momento de máximo volumen. A partir de esos datos iniciales, la sencilla metodología aplicada para el cálculo de los índices de vulnerabilidad provinciales procedió a una normalización de esos variables mediante su sustitución por valores estandarizados, calculando para ello el conocido como *índice z*, que identifica el número de

desviaciones estándar en que el valor de una variable se aleja del promedio de la serie, para establecer luego el índice sintético que integra esos seis índices parciales. En consecuencia, los valores positivos del índice reflejan una vulnerabilidad más alta que el promedio, tanto mayor cuanto más elevada es la cifra, mientras los valores negativos significan una vulnerabilidad relativa menor. Las regularidades espaciales que subyacen a esos resultados numéricos quedan bien reflejadas en el mapa adjunto, que estableció cinco conjuntos básicos.

La mayor vulnerabilidad corresponde a las tres provincias insulares, seguidas por otras cuatro del litoral mediterráneo peninsular (Girona, Tarragona, Castellón y Alicante), lo que confirma la estrecha relación con una fuerte especialización en actividades que forman parte del *cluster* turístico, que han sustituido progresivamente la presencia de otras que hasta hace tres décadas permitían una mayor diversificación de su base económica y laboral. La única excepción a este perfil es la provincia vasca de Araba, muy afectada por las dificultades actuales de dos sectores industriales muy ligados a cadenas de valor globales como son el aeronáutico y el de componentes del automóvil.

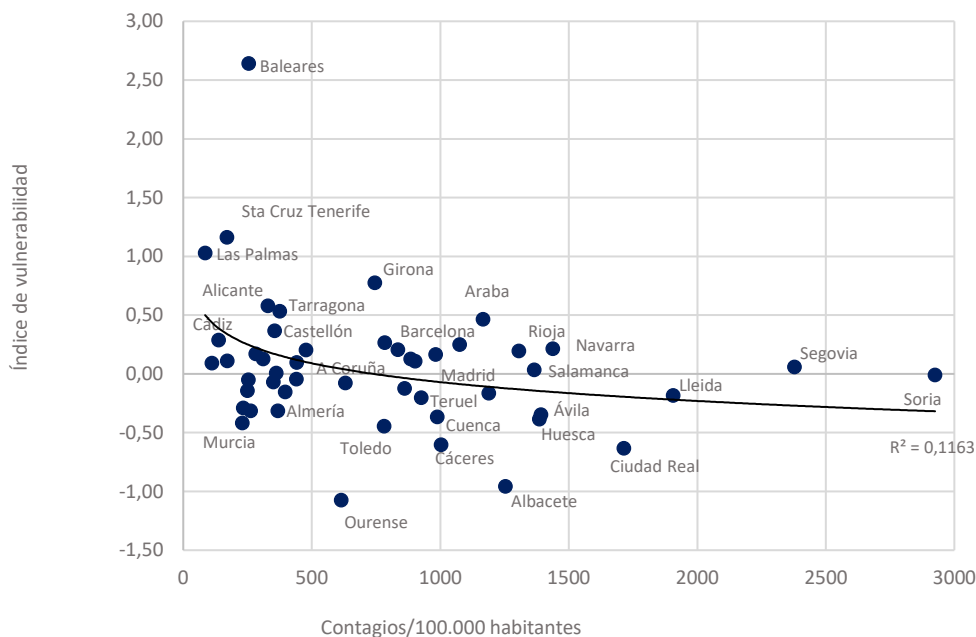
En esta crisis, otras provincias mediterráneas meridionales como Murcia, Almería o Granada, que en la anterior se vieron aún más afectadas que las anteriores por el hundimiento del sector inmobiliario asociado a su



funcionalidad turística, se encuentran ahora entre las de baja o muy baja vulnerabilidad porque la persistencia de una agricultura intensiva y una industria agroalimentaria consideradas como actividades esenciales, moderó el impacto laboral de la pandemia. Algo similar ha ocurrido en muchas provincias interiores -gallegas, castellanas aragonesas y extremeñas- con muy baja vulnerabilidad junto con la ciudad autónoma de Melilla.

Por su parte, las provincias donde se localizan las mayores áreas urbanas del país han tenido un comportamiento

territorio y de las decisiones de política económica tomadas en el pasado reciente, que en bastantes casos priorizaron el crecimiento a corto plazo, basado en explotar de forma intensiva los recursos naturales y humanos disponibles, a costa de fragilizar a regiones, comarcas o ciudades frente a posibles cambios en el entorno como los que conlleva toda crisis. En cambio, el diagrama de dispersión que correlaciona el índice de vulnerabilidad provincial con la incidencia de la enfermedad, medida a través de los contagios confirmados por cada cien mil habitantes hasta el 30 de junio, muestra que la asociación espacial entre ambas variables es casi nula.



heterogéneo, que puede relacionarse también con su particular estructura productiva. Las que cuentan con mayor presencia de industrias integradas en cadenas de valor globales, junto con ciudades turísticas de primer nivel (Bizkaia, Gipuzkoa o Sevilla) se sitúan entre las de alta vulnerabilidad, junto con Barcelona, que a lo anterior añade el *efecto Mediterráneo* asociado a sus espacios turísticos litorales. En otros casos, en cambio, ese impacto negativo es menor, lo que las sitúa como provincias de vulnerabilidad media (Valencia, Zaragoza), e incluso de baja vulnerabilidad relativa (Madrid). En esta última, la destacada presencia de actividades financieras, servicios a las empresas y empleos vinculados con las administraciones públicas, junto a una estructura ocupacional con mayor presencia de profesionales cualificados que han podido utilizar el teletrabajo como alternativa, amortiguaron la primera onda de choque provocada por la pandemia que, no obstante, sí afectó de forma intensa a otra parte significativa de sus residentes, agudizando los contrastes internos.

En conclusión, estos resultados reafirman la influencia prioritaria de la base productiva preexistente en cada

En casos extremos como los de Baleares, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas, su peor evolución económica y laboral poco tiene que ver con unas tasas de contagio que se sitúan entre las más bajas de España. En el extremo contrario, la mayor incidencia relativa de la primera ola -sin considerar aquí el inicio de una segunda a partir del verano- se produjo en algunas provincias interiores, a menudo poco pobladas y con una pirámide demográfica envejecida, cuya vulnerabilidad laboral resulta bastante heterogénea.



Este trabajo pretende contribuir al progreso en la consecución de un desarrollo sostenible y mejorar en los ODS 3, 10 y 11 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

PARA SABER MÁS:

Ricardo Méndez: *Sitiados por la pandemia. Del colapso a la reconstrucción: apuntes geográficos*. Madrid: REVIVES, septiembre 2020, 183 págs. Disponible en <http://revives.es/publicaciones/>